

Santiago de Cali, 18 de marzo de 2026.  
TRD 130-09  
A.B.O. 0336

Doctor  
**DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO**  
Director Técnico  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
Ciudad

ASUNTO: Respuesta a Radicado No. 202641480100001512

Respetado Doctor:

En atención a la comunicación del asunto al cual se nos dio traslado por competencia según por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y en el cual solicita que con el objetivo de dar respuesta a lo requerido por EMCALI EICE ESP en lo relacionado con la titularidad de los Contratos de Condiciones Uniformes (CCU) a partir de la terminación de los contratos de operación.

Al respecto es importante señalar que nos hemos referido al tema en nuestras comunicaciones ABO-0159 y ABO-0209 enviadas a la UAESP, pero además nuestro pronunciamiento en la comunicación ABO-0221 dirigida a EMCALI E.I.C.E. E.S.P y por lo cual reiteramos lo siguiente:

**Naturaleza jurídica del CCU y régimen de libre elección del prestador.**

El Contrato de Condiciones Uniformes constituye un negocio jurídico de tracto sucesivo entre el prestador y el usuario, cuya vigencia no se extingue automáticamente por la sola finalización del contrato de operación celebrado entre el operador y EMSIRVA E.S.P.

En efecto tal como advierte la Superintendencia, el vínculo contractual con el usuario subsiste en los términos previstos en la Ley 142 de 1994, hasta tanto el suscriptor ejerza su derecho de libre elección de otro prestador, conforme al procedimiento de desvinculación previsto en el Decreto 1077 de 2015.

Es así como, el régimen de libre competencia y la libre elección del prestador permanecen plenamente vigentes. El ejercicio de dicho derecho se materializa mediante la solicitud de desvinculación presentada por el suscriptor ante la persona prestadora correspondiente.

No obstante, lo anterior, se resalta que, además de la libre elección por parte del usuario, los operadores están en la obligación de respetar el clausulado de los contratos suscritos con EMSIRVA.

NIT. 890.399.030-3

### **Delimitación institucional conforme a los contratos de operación**

En atención a lo dispuesto en las cláusulas contractuales relativas a la reversión y entrega de información previstas en los Contratos No. 087-2008, 088-2008, 089-2008 y 005-2010, se establece expresamente que, un mes antes de la terminación del contrato, el Operador deberá informar que la empresa prestadora dentro del contrato de condiciones uniformes (artículo 128 de la Ley 142 de 1994) a partir de la terminación del contrato será EMSIRVA E.S.P. —o EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, según el caso—.

Dicha obligación a la fecha no ha sido cumplida por ninguno de los operadores.

En este punto, resulta relevante precisar que el catastro de usuarios, la información comercial, las bases de datos y los sistemas asociados a la gestión del servicio constituyen activos afectos a la prestación, cuya administración fue entregada a los operadores en el marco del contrato de operación, pero cuya titularidad y destino final corresponden a EMSIRVA E.S.P., en virtud de las cláusulas de reversión pactadas.

En consecuencia, la finalización del contrato de operación implica no solo la cesación de la habilitación operativa del contratista, sino también la obligación de restituir integralmente dichos activos, sin que resulte jurídicamente admisible su retención, uso autónomo o explotación por fuera del marco contractual.

En este contexto específico, y sin perjuicio de las acciones contractuales a que haya lugar con ocasión de la ejecución, terminación o liquidación del contrato, así como de los derechos que, en el marco del régimen de libre competencia consagrado en la Constitución Política y en la Ley 142 de 1994, asisten a los usuarios para ejercer su derecho de libre elección del prestador, **desde una perspectiva jurídico-contractual debe concluirse** que, conforme a las estipulaciones contractuales, la empresa prestadora a la finalización de los contratos de operación, es EMSIRVA E.S.P.

Esta previsión contractual no comporta apropiación de la clientela ni restricción alguna a la autonomía del usuario, sino que constituye una delimitación institucional del modelo de prestación adoptado, el cual fue aceptado por las partes en ejercicio de su autonomía privada.

Cordialmente,

  
**ADRIANA BETANCOURT ORTIZ**  
Liquidadora Representante Legal

Elaboró: Harold García — Coordinador Jurídico  
Revisó: Silvia Yepes Serrano

